

Boletín Oficial



DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 8 reales al mes para esta capital, y 10 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en esta Corte en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 589.

En la Gaceta de Madrid número 319 del sábado 6 de noviembre se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

En atención á las razones que me ha expuesto el Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. En aquellos pueblos cabeza de distrito en que, con arreglo á lo dispuesto en el art. 6º de la ley de 18 de marzo de 1846, hayan de celebrarse segundas elecciones, la de Ayuntamientos tendrá lugar el dia 14 del corriente.

Dado en Palacio a 5 de noviembre de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 10 de noviembre de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guílian.

Número 590.

Historia, servicios notables, socorros, comentarios de la cartilla y reflexiones sobre el cuerpo de la Guardia civil; dedicada á S. A. R. el Príncipe de Asturias por Don José Díaz Valderrama: su precio 16 rs.—Pueden hacerse los pedidos á los

Comandantes del cuerpo establecidos en las provincias.

El interesante asunto del anterior anuncio es suficiente para que por este Gobierno se le preste eficaz recomendación. Orense 8 de noviembre de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guílian.

Número 591.

La Dirección general de Contribuciones con fecha 28 de octubre último me dice lo que sigue:

Circular. Esta Dirección general, siguiendo el propósito de mejorar la imposición de la Contribución territorial en el señalamiento de los cupos provinciales, de los municipales y de las cuotas individuales, haciendo desaparecer las desproporciones que aun se observan de provincia á provincia, de pueblo á pueblo y de contribuyente á contribuyente, reclama para conseguirlo la eficacia de la Administración provincial, que debe tener ó adquirir un conocimiento exacto de la riqueza imponible, apreciado con inteligencia y con imparcialidad; hacer con rectitud los repartimientos y cuidar de que los Ayuntamientos hagan los suyos con la debida exactitud, observando las reglas establecidas, sobre todo las de publicidad, que son la mayor garantía de los contribuyentes y el mejor medio de evitar quejas injustas ó apasionadas.

Pero no basta para el propósito de la Dirección general que la administración obre reclamante en sus operaciones y exija lo mismo en las que le toca vigilar, si al mismo tiempo no se eleva á la altura en que deba colocarse, y comprendiendo que sus servicios son para el Estado, precediendo consideraciones con el mal entendido egoísmo de localidad, que es la rémora mayor del servicio público, para manifestar con franqueza la riqueza verdadera del distrito que administra, evaluada sin exageraciones, que no se necesitan ni se aprecian, y sin ocultaciones ó reservas que hacen imposible la nivelación del impuesto.

La Administración hasta ahora con pocas y honrosas excepciones se ha contenido en los límites ignorados, ora el 12, ora el 14 por ciento, cual si estos límites significasen el gravamen que tiene el producto imponible que notoriamente es mucho menor, y no fuesen únicamente tipos niveladores que sirvieron como servicio para evitar las desproporciones notables facilitando su reparación, y aunque en este sentido ha cumplido satisfactoria-

mente estos deberes con respecto á los pueblos y á los contribuyentes atendiendo á la necesidad mas inmediata, habiendo prescindido de facilitar á la superioridad con igual esmero y exactitud los medios de perfeccionar el reparto general, es preciso que para este objeto dedique también desde hoy su eficacia á esta parte no menos importante del servicio para que á la vez que se eviten los agravios que hay en la contribución, se pongan los datos que la administración posee de la riqueza del país en consonancia con la apreciación ventajosa que merece su importancia y valor, en crecimiento y desarrollo.

Con el objeto, pues, de conseguir la perfección del reparto en todas las operaciones de su distribución ó imposición y regularizar aun mas su cobranza, la Dirección general ha acordado que en el reparto y cobro de la correspondiente al año próximo de 1859, se observen con la mayor exactitud cuanto se halla prevenido en las instrucciones vigentes, y muy especialmente las siguientes reglas:

1.º Las Administraciones de Hacienda pública fijarán con la más posible exactitud el capital imponible de todos los pueblos de la provincia, haciendo la revisión y estudio de los datos estadísticos que poseen, y muy especialmente la rectificación que se les ha ordenado de las cartillas de evaluación para conocer con mayor seguridad que hasta ahora, el número y cantidad de los objetos imponibles, y clasificación, y los tipos á que deben evaluarse.

2.º Los pueblos que tengan mas capital imponible que el que se les consideró en los repartos anteriores, figurarán con la mayor cantidad en que ahora se aprecia la riqueza; y para rebajar la que se halle consentida ó la administración hubiese establecido como base de imposición, deberá mediar reclamación de agravio.

3.º Fijado el capital imponible de la provincia, el señalamiento de los cupos de la riqueza de cada pueblo se hará en proporción exacta del gravamen común que resulte, cesando las diferencias que hasta ahora hayan existido.

4.º El Gobierno de provincia dará noticia á la Administración de los recargos ordinarios y extraordinarios sobre la contribución territorial que se hayan concedido p. r. el presupuesto provincial y para los municipales, á fin de que se comprenda su importe en el repartimiento.

5.º Para que las Diputaciones y pueblos que no hayan obtenido la concesión de los recargos que necesiten para cubrir sus presupuestos no carezcan por esta

causa de los recursos necesarios, se comprenderá en el reparto á buena cuenta como se dispone en los artículos 24 y 61 de la Real instrucción de 8 de junio de 1847, una cantidad igual á la que se les haya concedido para este año, sin perjuicio de considerar sobrante para repartir de menos en el siguiente, la que por incesaria ó otros motivos no se solicite ni conceda.

6.º Se hará y publicará desde luego la liquidación del fondo supletorio, á fin de comprender en el reparto lo que falte para completar el 1 por 100 en que debe consistir, y además el déficit que resulte entre lo repartido por este concepto y el valor de los perdones y faldidos aprobados.

7.º La Administración hará el reparto á tiempo de que precisamente se presente el 20 de noviembre á la Diputación provincial para su examen y aprobación ó rectificación.

8.º El Administrador ó quien le sustituya, asistirá á las sesiones en que la Diputación trate del reparto, para dar verbalmente las explicaciones que puedan facilitar el examen y la resolución.

9.º Si la Diputación provincial alterase el reparto, y el Gobernador, previo informe de la Administración, considera procedentes las alteraciones hechas en él, se publicará en los términos que hubiere acordado la Diputación.

10.º Si el Gobernador, con acuerdo de la Administración, no aceptase las modificaciones que la Diputación provincial hiciera en el reparto, lo remitirá á la Dirección general con su dictámen para la resolución que corresponda, debiendo acompañar lo expuesto por la Diputación y por la Administración, con los datos en que una y otra apoyen su respectiva opinión acerca de los puntos en que estén en desacuerdo.

11.º En el caso de que el 28 de noviembre no haya la Diputación provincial despachado el reparto, por no haberse reunido ó porque lo retrase, lo aprobará y autorizará su publicación el Gobernador de la provincia.

12.º La publicación se hará por medio del Boletín oficial ordinario ó extraordinario, precisamente en los cinco primeros días de diciembre próximo, á no ser que se halle el reparto pendiente de la resolución de la superioridad.

13.º Los Ayuntamientos harán los repartos del cupo que se les señale en tiempo oportuno para que el 15 de enero se hallen examinados por la Administración y aprobados por el Gobernador.

14.º A la formación del reparto precederá la rectificación del amillaramiento.

15.º La exposición al público del ani-

Haciéndose constar por diligencia; sin que se dispense en caso alguno esta conveniencia formalidad.

16. Los Ayuntamientos que, por no ejecutar en tiempo oportuno el reparto iniciado, entorpeciendo la cobranza, serán responsables de lo que no se recaude en los plazos señalados con arreglo al artículo 101 del Real decreto de 23 de mayo de 1845.

17. No se aprobará reparto alguno en que resulte la riqueza gravada en más del 14 por 100 por el cupo del Tesoro, sin que se presente en debida forma la reclamación extraordinaria de agravio.

18. Cuando los Ayuntamientos no presenten el capital imponible que la Administración les considere y no haya motivo, no obstante, para exigirles la reclamación extraordinaria de agravio, porque hagan el reparto sin exceder del 14 por 100 el gravamen, la Administración hará que se esclarezca la razón de la diferencia por medio de la censura del amillaramiento, y en caso necesario, dispondrá, con arreglo a la orden de 1º de agosto de 1850, la comprobación de los puntos que sean objeto de cuestión.

19. La Administración dará la preferencia al despacho de los expedientes de reclamación de agravio y de diferencia en el capital imponible, para que no se demore la indemnización que proceda a los pueblos que puedan haber sido perjudicados.

20. Los Ayuntamientos que tengan a su cargo la cobranza de las contribuciones directas por no haber recaudador de cuenta de la Hacienda, procuraran nombrarlo con arreglo al Real decreto de 23 de mayo de 1845, y a la Real Instrucción de 5 de setiembre del mismo año, y en su defecto acordarán los medios de hacer este servicio con la debida puntualidad.

21. Las ofertas y costas de comisiones de apremio que la Administración expida, serán de cuenta del recaudador donde lo haya con responsabilidad directa a la Hacienda, y de los Ayuntamientos donde la recaudación esté a su cargo, ó del Alcalde, Ayuntamiento y juntas parciales en los casos previstos en los artículos 101 y 102 del Real decreto de 23 de mayo de 1845, sin que por motivo alguno deban imponerse a los contribuyentes.

22. Es obligatorio el uso de recibos de talón bajo la responsabilidad de los Ayuntamientos y recaudadores.

23. La Administración hará el reparto con arreglo al modelo adjunto núm. 1º, y remitirá a la Dirección general Ados ejemplares del Boletín oficial en que se publique.

24. Los repartos de los cupos municipales se arreglarán al modelo núm. 2º.

25. Se observarán todas las disposiciones del Real decreto de 23 de mayo de 1845, y de las Instrucciones o resoluciones posteriores que no estén en oposición con esta orden circular.

Lo comunica a V. S. esta Dirección general con inclusión de ejemplares para su inteligencia y cumplimiento, prometiéndole de su ilustración y de su celo dispondrá lo convenientemente para que por parte de la Administración y de los Ayuntamientos se cumpla en toda puntualidad, e importante servicio de que se trata, según las anteriores disposiciones, y espera que se sirva dar aviso de su recibo a su oficina.

Lo que se inserta en el Boletín para conocimiento de los ayuntamientos, sin perjuicio de las demás instrucciones que se reciban por separado. Ofrecese fe de noviembre de 1858. El Gobernador. Herminio Gutiérrez. Notificadas en el Registro General de Madrid. 1858. F. 31

NÚMERO 2º	Correspondiente al año de 1859.	REPARTIMIENTO	
		TOTAL.	Idem, por los Fucarros autorizados.
CONTRIBUCIÓN DE INMUEBLES, CULTIVO Y GANADERÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1859.			
Chollos	de contribución al 15º es por 100.		
TOTALES.			
SU IMPORTE			
Conceptos de riqueza según el amillaramiento.			
Riqueza:			
Urbania.			
Pecuaria.			
Colonias.			
Contribuyentes.			
Nº que se han hecho al amillramiento ó su equivalente de reciprocación.			
NOTA. Solicitud poniéndose a la cabecera y al final las demostraciones que hará abra se hagan en los repartos individuales.			
REPARTIMIENTO INDIVIDUAL QUE FORMA CADA AYUNTAMIENTO			
NOTA. Solicitud poniéndose a la cabecera y al final las demostraciones que hará abra se hagan en los repartos individuales.			
Nº 592.			
En la Gaceta de Madrid número 275 del sábado 2 de octubre se halla inserto lo siguiente:			
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.			
En la villa y corte de Madrid, 4 de setiembre de 1858, en los autos seguidos en el juzgado de Sorbas, en la Audiencia			

de Granada, entre Marcos Dominguez, de Caspe, y de la otra D. Diego Llorente, don Rafael Alejandro García y D. Andres Ruiz, albaceas de D. Diego Salinas y contadores partidores de su herencia, sobre protocolización del inventario, cuenta y partición de los bienes dejados por Doña Ana Garcia M. dia, mayor que fue de Salinas, sus pendientes ante nos por recurso de casación que interpuso Dominguez contra la sentencia pronunciada por la Sala de Segunda de dicha Audiencia.

Resultando que Salinas y su expresada

mujer otorgaron testamento en 1825, en

el que, después de instituirse mutuamente

herederos usufructuarios de sus respecti-

vos bienes, nombró cada uno de ellos los

que habían de serlo en propiedad, desig-

nando la García para que lo fuere de los

suyos, entre otras personas, a Doña

Catalina su hermana, abuela materna de

Dominguez, y a los hijos y descendientes

de ésta:

Resultando que la testadora falleció

en 1831, época en que había muerto su

hermana, la cual dejó por hija a

la madre de Dominguez, Isidra Sanchez,

que murió en 1848:

Resultando que instruido extrajudicial-

mente el expediente de inventario, cuenta

y partición de los bienes de la García,

quedó en tal estado sin reducirse a

escritura pública:

Resultando que solicitado por Dominguez

que los herederos de Salinas entre-

gasean o exhibiesen dicho expediente para

sacar de él los testimonios que designaría,

fue presentado por los referidos albaceas,

que lo habían tenido á la vista para la

división de los bienes de Salinas, mandando

el Juez de Sorbas, por auto de 11

de junio de 1856, que Dominguez, en el

termino de 15 días, señalarase los testimo-

nios que se habían de sacar, quedando

para ello de manifiesto el expediente en

poder del actuante:

Resultando que el interesado no hizo

la designación, sino que pidió en 15 de

dicho Junio que se protocolizase el expedi-

ente:

Resultando que de esta solicitud se

confirió traslado a los albaceas y contado-

res partidores de la herencia del Salinas,

quienes formaron artículo de previo pro-

nunciamiento, para que se declarase que

no estaban obligados a contestar á la

demanda, fundádolo, entre otras razones,

en la de ser ordinaria y no expresarse en

ella contra quien se dirigía, y en que no

se conceptuaban vestidos de la competen-

te representación para oponerse a la

solicitud, ó consentirla, mediante estar

limitadas sus facultades á ejecutar lo

dispuesto por Salinas:

Resultando que Dominguez insistió en

su pretensión, y expuso que no podía

afectarle el traslado, que sin pedírselo él se

había conferido a los albaceas de Salinas,

síndole de todo punto extraño el artículo

de incontestación, y que lo que procedía

era dejar á un lado á dichos albaceas,

puesto que ellos mismos confesaban care-

cer de representación para intervenir en

el negocio, y fijarse en que el escrito, pi-

diendo la protocolización no era una de-

manda ordinaria, sino de aquellas que sur-

tan su efecto así que se deducían en for-

ma por cuálquier de los herederos:

Resultando que llamados los autos y

citadas las partes, recayó providencia en

14 de julio, en la que, después de calificar

de demanda ordinaria la solicitud de pro-

totocalización y de expresarse que, siéndolo

no estaba ajustada á lo prevenido en la

ley de Ejecución civil, y se mandó que

Dominguez diera su demanda de pro-

totocalización en la vía y forma que mas

hubiese lugar en derecho, y contra quien

de quienes legítimamente procediese, sin

especial condenación de costas:

Resultando que solicitada por los albaceas

claración de esta providencia por no learse

con claridad, según dijeron, en la copia

que se les había dado de la sentencia lo

que se había acordado acerca de la condenación

de costas, se proveyó en el mismo

julio que se entendiese con especial con-

denación de costas la que se tenía impuesta

a Dominguez por su defectuosa demanda

de protocolización y demás actuaciones a

que había dado lugar:

R. sultando que remitió los autos á la Audiencia en virtud de la apelación que interpuso Dominguez, y alzada la vista, se dictó en 5 de diciembre del expresado año de 1850 sentencia, por la que, considerando que la solicitud de protocolización no tenía calidad de acto de jurisdicción voluntaria, no habiendo sido por lo mismo procedente el aplazamiento de los albaceas, y que Dominguez podría ejercitar el derecho que le convenga con el testimonio del expediente de inventario y demás que en la pieza separada que se había formado se le mandaba librarr; se revocaron las providencias apeladas de 14 y 17 de julio, y se declaró que no había lugar á la protocolización que los albaceas no debían mostrarse parte en estas diligencias, y que eran de cargo de Dominguez todas las costas de ambas instancias.

Resultando, finalmente, que contra esta sentencia se interpuso recurso de casación, fundado relativamente á la negativa de la protocolización, en haberse infringido la doctrina y jurisprudencia de los Tribunales, que siempre acceden á que se protocolicen los expedientes de la clase del que se trata cuando lo solicitan los interesados para levantar su efecto, darles el carácter de auténticos y que tengan los herederos títulos fehacientes; y con respecto á las costas que se establecen el caso del artículo 1.008 de la ley de Ejecución civil, cuyas disposiciones se habían infringido imponiendo las costas al apelante, siendo así que se revocaban las providencias del inferior, jamás podrían imponerse las costas al apelante, y mucho menos en el presente caso, en que una de las providencias revocadas contenía la aplicación de costas al recurrente, resultando de aquella contradicción palmaria:

Vistos; siendo Ponente el Ministro Don Miguel Osca:

Considerando que la cuenta y partición de bienes hereditarios, como título de pertenencia de los adjudicados á cada uno de los herederos, es indispensable se protocolice, ora se atienda al interés particular ó general, ora al de la Hacienda pública:

Considerando que el testimonio de la cuenta y partición de bienes de la García, que se dice en la sentencia de que se trata haberse mandado liberar á Dominguez, no equivale á la protocolización ni para garantizar los intereses de este de presente y mucho menos en el porvenir, ni para otros efectos judiciales y extrajudiciales:

Considerando que con la denegación de la solicitud del recurrente, además de privarsele del derecho expedido que le asiste para que se reduzca a escritura pública el expediente en cuestión, se faltó á la doctrina admitida por la jurisprudencia, conforme á la cual debe protocolizarse todo documento del que resulte traslación de dominio ó esté relacionado con hechos y obligaciones que consten en otro que tenga la misma autenticidad:

Considerando que si bien el art. 1.008 de la ley de Ejecución civil, por contrarse exclusivamente sus disposiciones al juicio ejecutivo, no es aplicable á estos autos, y que por regla general la simple condena de costas no puede dar lugar al recurso, hay que notar, sin embargo, en el presente caso la manifestada contradicción en que ha incurrido la Sala sentenciadora, imponiendo las costas al apelante Dominguez, después de haber revocado las dos providencias apeladas, siendo el objeto único y exclusivo de una de ellas la misma imposición;

clarimos haber lugar al mencionado recurso, y en su consecuencia, casamos y anotamos la expresa sentencia dictada por la Sala tercera de la Audiencia de Granada, cancelanose la caución otorgada. Y lo acordado.

Y por la presente sentencia, que se publicará en la Gaceta de esta corona e insertaré en la Colección legislativa, pasándose el efecto, los correspondientes copias certificadas, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan Martín Carramolino.—José González Naudin.—Jorge Gibert.—Miguel Osca.—Antero de Echarri.—Fernando Calderón y Collantes.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Exmo. é Ilmo. Sr. D. Miguel Osca, Ministro de la Sala primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública en la misma Sala, en este dia de hoy, de que yo el Escrivano de Cámara certifico.—Madrid 29 de setiembre de 1858.—Juan de Dios Rubio.

En la villa y corte de Madrid, a 30 de setiembre de 1858, en el pleito seguido en el juzgado de primera instancia de Vitoria y en la Real Audiencia de Burgos por Doña Estefanía Ortiz del Hierro, consorte de Don Francisco de la Torre Gil, por si y en nombre de sus hijos menores: D. José, D. Lorenzo, Doña Francisca y Doña Rosa de la Torre y Ortiz, contra D. Francisco de la Torre y Ortiz, también su hijo, sobre tercera y designación de alimentos provisionales, pleito pendiente ante nos en virtud de recurso de casación interpuesto por D. Francisco de la Torre Ortiz de la sentencia pronunciada por la Sala segunda de dicha Audiencia, y sobre cuya admisión se ha suscitado en este Supremo Tribunal la cuestión previa á que se contrae el art. 1.090 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Resultando que señalada judicialmente a D. Francisco de la Torre y Ortiz, en concepto de alimentos provisionales, la cantidad de 48,000 rs. vns. apnulos que le había de abonar su padre D. Francisco de la Torre y Gil por mensualidades anticipadas, acudió la Doña Estefanía Ortiz en 29 de diciembre del año último al juez de primera instancia de Vitoria intentando demanda de tercera dotación y pidiendo además que se le asignase alimentos, así como a sus cuatro hijos menores ya citados, en proporción del caudal existente en la sociedad conjugal y de los rendimientos de los bienes embargados a instancia de su otro hijo, para el pago de los alimentos que tenía señalados, cuyos procedimientos se suspendieron.

Resultando que habiéndose limitado el juez, en el auto que dictó sobre dicho escrito, á conserir traslado de la demanda de tercera a D. Francisco de la Torre y Ortiz, la Doña Estefanía, fundada en no basarse preyoendo sobre la designación de alimentos y suspensión de procedimientos pidió reforma, que fue denegada, admitiéndose la apelación que subsidiariamente interpuso; y remitió los autos á la Audiencia de Burgos, la Sala segunda, revocando la providencia apelada, mandó devolver los autos al juez para que proveyese sobre los dos puntos referidos.

Resultando que el juez de primera instancia acordó, que respecto á la pretención de alimentos provisionales se acreditaran los extremos que se contenían en los números segundo y tercero del art. 1.210 de la ley de Enjuiciamiento Civil, y denegó, por entonces, la suspensión de actuaciones en el expediente sobre alimentos provisionales asignados al Don Francisco, los cuales contiene en los

números segundo y tercero del art. 1.210 de la ley de Enjuiciamiento Civil, disponiendo que el juez de primera instancia hiciera la designación de alimentos que se pedían por aquella, teniendo al efecto los presentes los datos que habían servido para la de Don Francisco de la Torre y Ortiz, y lo obrado con posterioridad, consumándola en lo demás, con cierta modificación relativa á la no suspensión de las actuaciones.

Resultando que D. Francisco de la Torre y Ortiz interpuso contra esta sentencia recurso de casación, que fundó en que era contra ley y doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales.

Resultando que admitido el recurso y remitidos los autos á este Supremo Tribunal, Doña Estefanía Ortiz del Hierro ha promovido la cuestión previa de que habla el art. 1.090 de la ley de Enjuiciamiento civil, por juzgar inadmisible el recurso, en atención a que la sentencia de que se ha interpuesto no ha recaído sobre definitiva, y el juicio de alimentos es por su naturaleza sumario;

Vistos; siendo Ponente el Ministro Don Miguel Osca:

Considerando que el presente recurso se ha fundado en ser la sentencia contraria á la ley y doctrina admitida por la jurisprudencia, conforme al artículo 1.012 de la ley de Enjuiciamiento civil, el cual fué citado por la Sala sentenciadora como uno de los que consultó para admitirlo;

Considerando que esta clase de recursos no proceden, según lo dispuesto en el artículo 1.014 de la citada ley, en los pleitos posesorios, en los ejecutivos y en todos los demás, después de los cuales puede seguirse otro juicio sobre lo mismo que haya sido objeto de ellos;

Considerando, por último, que las cuestiones suscitadas en este expediente pueden reproducirse en juicio ordinario, razon que bastaría, aun sin otras que haya mas directas, para convencer que no es aplicable al caso presente la regla 14 del artículo 1.208 de la repetida ley, cuya disposición debe entenderse concretada á los actos de jurisdicción voluntaria expresados en el párrafo primero del mismo artículo;

Fallamos, que debemos declarar y declaramos que procede la cuestión previa de que trata el artículo 1.090 de la ley de Enjuiciamiento civil, promovida por Doña Estefanía Ortiz del Hierro; y en su consecuencia mandar y mandamos quede sin efecto la providencia de 19 de Mayo ultimo de la Sala segunda de la Audiencia de Burgos, por la que fue admitido el recurso de casación interpuesto á nombre de D. Francisco de la Torre y Ortiz contra la sentencia de 1.^o de dicho mes y año, y que se devuelvan los autos á la referida Audiencia para los efectos correspondientes en derecho. Por esta uñestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de esta corte dentro de cinco días, y se insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto los correspondientes copias certificadas, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan Martín Carramolino.—Sebastián González Naudin.—Miguel Osca.—Manuel Ortiz de Zúñiga.—Antero de Echarri.—Fernando Calderón y Collantes.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Exmo. é Ilmo. Sr. D. Miguel Osca, Ministro de la Sala primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el dia de hoy, de que yo el Escrivano de Cámara certifico.—Madrid 30 de setiembre de 1858.—Juan de Dios Rubio.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 7 de noviembre de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guittian.

Estado número de los aprehensiones verificadas por la Guardia civil de esta provincia en los meses de agosto, setiembre y octubre últimos.	
Total de presos conducidos en el mes	867
Total de presos capturados	155
Contrabandistas aprehendidos	1
Armas y proyectiles	29
Detenidos por otras leyes y entregados á la Justicia	41
Deseriores aprehendidos	3
Ladrones aprehendidos	4
Delincuentes aprehendidos	61
Total de presos aprehendidos	

D. Julian Nuñez, Castro Laza, idem de la de idem.
D. Francisco Pazos, Soutelo Verde, idem de la de idem.
Idem idem de Valdeorras.
D. José Manuel Arias, Porto Mourisco, vereda de Valdeorras.
Idem idem de Allariz.
D. Marcelino do Barrio, Cardeira, vereda de Junquera.
Idem idem de Orense.
D. Manuel Domínguez, Paiseo, vereda de Maceda.

En su consecuencia se declaran vacantes dichos destinos; y los interesados que se crean idóneos para desempeñarlos, pueden dirigir sus solicitudes á esta Administración principal, acreditando poder pagar al contado los efectos que se le encuen-
tran para su venta, y reunir además
copias legalizadas de sus licencias absolutas ó documentos de servicios prestados al Estado, dentro de ocho días, contados desde la publicación de este anuncio.

Orense, 7 de octubre de 1858.—
J. Manso.

JUNTA PROVINCIAL de instrucción pública de Orense.

No habiendo remitido aun á esta Junta los Alcaldes de los Ayuntamientos que á continuacion se expresan, los partes y recibos del personal y material de los maestros de primera enseñanza correspondientes al tercer trimestre de este año; se les previene que de no verificarlo al término de tercero dia se procederá contra los morosos con arreglo á lo dispuesto sobre el particular por la legislación del ramo. Orense 6 de noviembre de 1858.—E. G. P., Hermenegildo Guittian.—Eliseo Fidalgo y Saavedra, secretario.

Ayuntamientos que se citan:

Amoeiro. — Rio. — Miceda.
Acedo. — Manzaneda.
Baltar. — Merca.
Bande. — Mezquita.
Barco de Valdeorras. — Montederramo.
Beade. — Monterrey.
Beariz. — Moreiras.
Boborás. — Muíños.
Bola. — Paderne.
Calvos de Randín. — Padrenda.
Caneo. — Pereiro de Aguiar.
Carballeda. — Peroja.
Carballino. — Petín.
Cartelle. — Puebla de Trives.
Castrelo de Miño. — Quinta de Leirado.
Castrelo del Valle. — Rio.
Cea. — Ríos.
Cualedro. — Rúa.
Chandrexa. — Rubiana.
Entrimo. — Sandiánes.
Ginzo. — Sarreaus.
Gudiña. — Teixeira.
Irijo. — Verín.
Junq. de Espadán. — Villamartín.
Laroco. — Villamario.
Laza. — Villamea.
Lovera. — Villanúa de Ipsantes.
Loviros. — Vilardebós.

UNIVERSIDAD LITERARIA DE SANTIAGO.

En virtud de lo prevenido en la Real orden de 10 de agosto último ha de pro-
veerse por oposición la plaza de maes-

D. Pedro Carpintero, Rozamonde,
idem de la Barca.
Idem idem de Verín.
D. Francisco Fernández, Magdalena,
vereda de la Gironda.

trada de 1.^a enseñanza de la escuela vacante de San Martín de Quiroga, dotada con 2,000 rs. y 500 para menaje, y además las retribuciones de los niños pudentes. Las aspirantes que reunan los requisitos prevenidos en la ley de Instrucción Pública dirigirán sus solicitudes documentadas al Sr. Gobernador Presidente de la Junta Provincial de Lugo, dentro del término de un mes que principiará a contarse desde el día que inserte este anuncio en el Boletín Oficial de la misma; en la inteligencia que transcurrido este plazo se verificarán inmediatamente los ejercicios en los días y horas que señale el tribunal.

Santiago 1.^o de noviembre de 1858.—D. O. del Sr. Rector; el secretario general, *Francisco Otero y Porras*.

Conforme á la Real Orden de 10 de agosto último han de proveerse por concurso las plazas de maestros de 1.^a enseñanza vacantes en los pueblos siguientes:

PROVINCIA DE LUGO.

Escuelas completas de Niños.

La de Santa María de Forcas, San Román de Cervantes, y San Andrés de Nogales, en el partido judicial de Becerreá.

Las de San Juan de Antas y San Miguel de Esporiz, en el partido judicial de Chantada.

Las de Santa María Magdalena de Navia de Suarna y Sta. María de Meira en el de Fonsagrada.

La de Santa María de Abadín en el de Mondaredo.

La de San Juan de Scoane en el de Quiroga.

Las de San Vicente de Carracedo, San Miguel de Paradela, San Salvador de Pinedo de Paramo y Santa María de Rendán, en el de Sarria.

Las de San Vicente de Villamea y Santa María de Cossorio, en el de Ribadeo.

Las de Santiago de Sargadelos, San Pedro de Merás y la ayudantía de la escuela de la villa de Vivero, en el partido judicial de Vivero.

Cada una de dichas escuelas tiene señalados 2,000 rs. de dotación y 500 para menaje, y además casa y retribuciones de los niños pudentes.

PROVINCIA DE ORENSE.

Escuelas completas de Niños.

La de Maceda, en el partido judicial de Allariz, con la dotación de 2,200 rs.

La de Monterredondo en el de Bande, con 1,100 rs.

Las de Vieira, Lubanes, Piteira, Beiriz, Vidgeiro, Amarante, Armeses, Ourense y Vilela, en el partido judicial de Carballedo con 1,100 rs. cada una.

La de Cortegada con 1,100; la de Viondo con 1,000; la de Refojos con 1,000; la de Louredo con 1,149; la de Pao con 2,200; las de Poulo, Fustanes, Merca, Villamea, en el partido judicial de Celanova, con 1,100 rs. cada una.

Las de Anceiro, Rouzos y Trasalva con 1,100; las de Cachalvite, Caldas y Ramiranes con 1,200; las de Barrio y Mugares con 1,100; las de Barbadeas y Bentrazos con 1,060, en el partido judicial de Orense.

Las de San Andrés de Ribadavia, Villegas de Conde y Barrosa con 1,100; las de Santa María de Castro de Mino y San Esteban de Castro con 1,800; las de Astariz, Macendo y Cenlle con 1,100; la de Riobó con 5,500, en el partido de Ribadavia.

Las de Quiñones y Sobrado con 1,100; la de Rio con 2,000, en el partido judicial de Trives.

La de Grijoa con 1,000; las de Pinza y las Hormigas con 2,200, en el partido judicial de Viana del Bollo.

Escuelas completas de Niñas.

La de Trives con 1,555 rs.

Los aspirantes que reunan las circunstancias prescritas en la citada Real Orden, dirigirán sus solicitudes documentadas al Sr. Gobernador Presidente de la Junta de Instrucción Pública de la respectiva provincia dentro del término de un mes, que principiará a contarse desde el día que inserte este anuncio el Boletín Oficial de la misma.

Santiago 1.^o de noviembre de 1858.—D. O. del Sr. Rector; el secretario general, *Francisco Otero y Porras*.

Ayuntamiento de Cualedro.

Solicitada por varios vecinos del pueblo de Santa Eulalia de Montes en este municipio, ante el Sr. Gobernador civil de la provincia, la estadística del expresado pueblo de Montes incluso su barrio de Lausas; se anuncia al público con objeto de que los peritos que quieran interessarse en la práctica de la estadística anunciada, concurren el 5 de diciembre al mencionado pueblo de Santa Eulalia dos Montes a hacer las proposiciones que crean convenientes.

Cualedro noviembre 5 de 1858.—El A. P., *Benito Salgado*.—Manuel Pérez, secretario.

Juzgado de 1.^a instancia de Ribadavia.

Don Felipe Varela Varela, Escribano por S. M. del juzgado de 1.^a instancia de Ribadavia.—Certifico: hallarme dando

se en las diligencias de apremio en que entiendo por delegación del Sr. Gobernador de la provincia, D. José Alvarez Fernández, Administrador de Rentas subalternas de esta villa, contra D. Alonso Delgado, Administrador de Loterías que fue en la misma, para hacer pago de 4,1926 reales y 30 céntimos que han resultado de alcances de dicho remo. No habiéndose hallado al deudor, se le requirió por cédula, y acordó hacerlo también por edictos en los Boletines oficiales, para que tenga efecto el tercer y último, contado desde la inserción, firmo la presente con el V.^o B.^o del comisionado, por la que se requiere al deudor concurre a satisfacer dentro de dicho término principal y costas; apercibido de que pasado se continuaran las diligencias sustanciándose con los estrados por su ausencia y rebeldía. Ribadavia noviembre 1.^o de 1858.—Felipe Varela.—V.^o B.^o, José Alvarez.

Idem del Padron.

Don Felipe Viñas, caballero de la Real y distinguida orden española de Carlos III y juez de primera instancia en la villa y partido del Padron.—Por medio del Boletín Oficial exhorto en la forma de derecho a los señores jueces de primera instancia, comandantes de la Guardia Civil Alcaldes y mas funcionarios de justicia de este territorio de Galicia se sirvan disponer la captura y remisión a este juzgado de la persona de José Benito Vázquez, vecino de San Mamed de Portela, cuyas señas irán expresadas, como reo comprendido en causa criminal por hurto de bollerías en el distrito de Rois, mediante así lo tienen mandado S. E. los señores de la Sala segunda de la Audiencia de la Coruña, donde actualmente pende la causa pues en ello se interesa el mejor servicio público y recta administración de justicia. Dado en la villa de Padron á 28 de octubre de 1858.—Felipe Viñas.—Por mandado de S. S., Angel Astray Fernandez.

Señas y vestido del reo.

Edad de 29 ó 30 años, estatura mayor de 5 pies, pelo negro, ojos castaño-oscuros, barba negra poco poblada, cara redonda, color moreno; viste sombrero ser-

reno portugués, chaqueta de paño color bronce, chaleco idem y de seda con flores encarnadas y fondo claro, pantalón de tarazona y de tela rayada negra, calzado de botas las mas de las veces.

Juzgado especial de Hacienda de Orense.

Don Rafael Blanco Alcalde, Juez especial de Hacienda de la provincia de Orense &c.—Por el presente cito, llamo y emplazo a Francisca Alonso, vecina de Lomea, Alcaldía de Calbos de Randín, en el partido de Ginzo, por término de treinta días, para que se presente en este Juzgado por la escribanía del que autoriza á fin de notificarle auto de traslado dado en causa que se le sigue por aprehension de una libra de sal de contrabando; apercibida de que transcurrido dicho término sin verificar su presentación, se sustanciará la causa en rebeldía practicándose las notificaciones que ocurrán en los estrados de esta audiencia, las que le pararán igual perjuicio que si fueren en su persona. Dado en Orense á 27 de octubre de 1858.—Rafael Blanco Alcalde.—Por mandado de S. S., Valentín de Noya.

cuartilla de centeno de renta para su dominio, 56 rs.

9.^a Y la casa en que habita el José Alvarez con una sola habitación de veinte y cinco varas castellanas de hueco, pero sin bajo alguno, demarcada norte Celestina Alvarez, viacente Gabriel Alvarez y en lo demás Ramon Conde, su retasa con descuento del capital de onza y media de cera, 280 rs.

Suman las partidas anteriores 1,336 rs.

Cuya subasta tendrá lugar el jueves 2 de diciembre del corriente año, de once á doce de la mañana del mismo día, en la audiencia de la alcaldía de Nogueira de Ramuín, ante el Alcalde y Escribano numerario de ella; durante dicha hora se admitirán las posturas que los licitadores hician á los bienes anteriormente relacionados, rematándolos en favor del más ventajoso postor. Dado en Orense á 3 de noviembre de 1858.—Rafael Blanco Alcalde.—Por mandado de S. S., Valentín de Noya.

Juzgado de Guerra de la provincia de Orense.

El Sr. D. Ramon Calvino, Gobernador militar interino de la provincia de Orense.—Y el Lic. D. José Espada, Asesor del juzgado de Guerra de la misma.—Por el presente se cita, llama y emplaza a Antonio Gonzalez, vecino del lugar de Bustaballe, parroquia de Santiago de Zorelle, Alcaldía de Maceda, para que en el término de 20 días á contar desde la fecha de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de esta provincia, se presente en dicho juzgado al fin de practicarle cierta diligencia de justicia en causa que se sigue contra los tolerantes y ocultadores del desertor Manuel González, del mencionado lugar de Bustaballe; con prevención de que pasado dicho término sin verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar. Dado en la ciudad de Orense á 24 de octubre de 1858.—Ramon Calvino.

—José Espada.—Por mandado de S. S., Vicente Manuel Puga.

El Sr. D. Ramon Calvino, Gobernador militar interino de la provincia de Orense.—Y el Lic. D. José Espada, Asesor del juzgado de Guerra de la misma.—Por el presente se cita, llama y emplaza a Juan Pereira y Josefa Blanca, vecinos de Pesqueira, padres de Francisco, sargento segundo que fué del regimiento de Asturias, que falleció en el Hospital militar de Alicante; y á falta de aquellos á las demás personas que se crean con derecho á la herencia de dicho fallecido, para que en el término de 15 días á contar desde la fecha de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de esta provincia se presenten en el indicado juzgado á fin de practicarles cierta diligencia de justicia en el expediente de inventario formado por muerte del expresado Francisco; bajo apercibimiento que pasado el mencionado término sin verificarlo se dará al obrado el trámite que corresponda parándoles el perjuicio que haya lugar. Dado en la ciudad de Orense á 28 de octubre de 1858.—Ramon Calvino.

—José Espada.—Por mandado de S. S., Vicente Manuel Puga.

MANUFACTURA DE CAOUTCHUC DE PARIS.

Se halla de paso en esta ciudad un comisionado con un gran surtido de objetos de goma elástica como son gabanes, capuchas, polainas, zapatos, escarpines, &c. Las personas á quienes interese la adquisición de alguno de estos artículos, pueden concurrir á la casa número 3 de la Plaza Mayor.